

autos á la Corte Suprema de Justicia.

Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo. Doy fé.—*José María Canalizo.*—*Fernando Zamora*, secretario.

Es copia. México, Enero 23 de 1874.—*Fernando Zamora*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 25 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de esta Capital, por la Señora Dª Remedios Flores y Torices, contra la resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 27 de Setiembre de 1871, en virtud de la cual fué despojada de la casa número 4 de la calle de Chiconautla de que es propietaria, con violación de las garantías consignadas en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución federal; y

Considerando: Que la resolución del Ministerio de Hacienda que declara no estar justificado que Dª María de Jesus Torices, madre de la quejosa, hubiera verificado la redención de la finca, ó que por gracia especial se le hubiera condonado el precio de esta, y mandó en consecuencia adjudicarla al denunciante C. Felipe Cortés, no pudo tener por sí sola como consecuencia legal é inmediata, el efecto de hacer perder á Dª Remedios Torices los derechos que tenía adquiridos sobre la casa, ni privarla de su posesión á favor del nuevo cesionario del Gobierno, sino que antes era preciso fuera vencida en el juicio correspondiente de preferencia, establecidos por las leyes de desamortización, lo cual aun no se ha verificado.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 16, 27, 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta:

1º Es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez 2º de Distrito de esta Capital en 13 de Enero del presente año, por la que declaró no proce-

der el amparo federal en el presente caso.

2º La Justicia de la Union ampara y protege á la Señora Doña Remedios Flores y Torices, contra el despojo que sufrió, de la casa número 4 de la calle de Chiconautla, en virtud de la resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 27 de Setiembre del año de 1871.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándola testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal plen de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*J. M. Iglesias.*—*P. Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*J. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*H. Lanla*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 9 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Domingo Evla en nombre del C. diputado Evaristo Esquivel, contra el C. coronel José Matilde Alcoser, que con el carácter de encargado del poder Ejecutivo del Estado lo puso preso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Matilde Alcoser, ha evacuado el informe que deben rendir sobre lo principal del acto reclamado contra él en este juicio de amparo, pero las razones en que lo apoya, ni la copia certificada de la declaración de bien preso del quejoso, que acompaña á

él justifican el procedimiento que motiva el recurso. Porque suponiendo que no sea sin pretexto inventado por las pasiones políticas, de que el C. Alcocer tiene la imparcialidad de declararse libre, lo de haber venido el C. Evaristo Esquivel á conspirar á esta ciudad, como se expresa en dicho informe, siendo diputado suplente á la H. Legislatura del Estado, y gozando en consecuencia del fuero que la Constitucion particular del mismo le concede, ya que tan solícito se muestra por la conservacion del orden y el cumplimiento de la ley, debió haber hecho la consignacion simplemente sin necesidad de reducirlo á prision; porque primero era declararlo con lugar á formacion de causa para que luego al principio de ella, se le pusiera preso si el delito era de los que su definitiva merecian pena corporal. Un ejemplo reciente de los procedimientos que se instruyen contra los funcionarios que gozan del fuero constitucional nos ofrece el muy célebre que la cuarta legislatura siguió contra el C. Gobernador Lic. Miguel Castellanos, quien acusado, ante ella de una falta ministerial, fué declarado culpable por el Gran Jurado que lo juzgó, pero sin que antes ni durante la sustanciacion del juicio que concluyó con el veredicto condenatorio, se haya intentado siquiera privarlo de su libertad. La única diferencia que existe entre aquel y este caso, es: que al Sr. Lic. Castellanos se atribuía una falta ministerial, en tanto que al C. Esquivel se imputa un delito común; pero entonces ha debido previamente declarar el Jurado si ha ó no lugar á proceder contra el acusado conforme al artículo 88 de la Constitucion política del Estado, que es tambien la diferencia única establecida entre las declaraciones de culpabilidad ó de proceder que respectivamente se hacen en los juicios seguidos por faltas ministeriales ó delitos comunes. Por otra parte, si á un Gobernador le fuese lícito usar sin restriccion de la facultad concedida en la cláusula 24 del artículo 58 del propio Código parti-

cular del Estado, en que el C. Alcocer dice se apoyó para decretar el arresto de Esquivel, si la inmunidad de los que gozan del fuero constitucional no estuviese á cubierto de los abusos de dicha facultad, nada sería mas fácil que con el pretexto de que una mayoría del Congreso hostil al Ejecutivo, estaba conspirando, redujese éste á prision á los individuos que lo componen para inutilizarlos en los momentos solemnes de votar una ley ó un decreto que le perjudicase. Y el poder legislativo, que es el soberano y no se apoya mas que en la fuerza moral de su misma soberanía, quedaría á merced de los caprichos del Ejecutivo que dispone de la fuerza armada para hacer triunfar aun sus mas grandes violencias. Y los golpes de Estado vendrían á adquirir por este medio la aparente sancion de la Constitucion que la Constitucion no les presta ni puede prestarles en realidad. Pero si el C. Alcocer creía que cumplia con los deberes que la fracción 1.^a del artículo 58 de esta le impone mandando reducir á prision al C. diputado Evaristo Esquivel, debió haber dudado, por lo mismo, á cuál fraccion de las dos en que dividió la Legislatura haría la consignacion del presunto reo; porque haciéndola á la que aparece estarlo juzgando, que es precisamente la que tiene á su abono el mantener en el encargo del poder ejecutivo al repetido C. Alcocer contra lo resuelto por la otra fraccion á que pertenece el consignado, podrá sospecharse con fundamentp no escaso que en la eleccion del juez no ha habido absoluta independencia y que no hay imparcialidad tampoco en el elegido puesto que se le entrega á aquellos contra cuyos trabajos políticos se ha puesto en pública y abierta lucha. No es de este lugar ni propio del ministerio del infrascrito, entrar en el exámen y análisis de cual de esas dos fracciones rivales es la que realmente conserva el título de legislatura legítima del Estado de Yucatan aunque esta cuestion de derecho político constitucional debiera ser analizada en este jui-

cio para buscar la competencia del juez que juzgó al quejoso; pero no hay necesidad de entrar en tan enojosa tarea, que pudiera valer al infrascrito una vez mas la nota de parcial con que el imparcial C. José Matilde Alcocer lo califica, cuando para demostrar la incompetencia del gran Jurado que ha declarado bien preso al C. Evaristo Esquivel, basta saber que conforme al artículo 88 citado de la Constitucion local, en virtud del que procede, sus facultades son administrativas y preparatorias del procedimiento criminal que deba seguirse, caso de declararse que ha lugar en él. Luego evidentemente no es autoridad competente el gran Jurado y mucho menos su "comision" que es una parte del tribunal referido, para declarar bien preso al acusado; que compete solo á la autoridad judicial hacer esta declaracion en vista del mérito del proceso que aun todavia no se ha fallado si debe abrirse ó no al C. Evaristo Esquivel. Resulta, pues, que sea legítima ó ilegítima la parte de la II- Legislatura á la cual hizo el C. José Matilde Alcocer, como encargado del poder ejecutivo, la consignacion del diputado preso, C. Evaristo Esquivel, y sea que ella ó él lo mantengan en prision, el hecho importa una violacion de las garantías que otorgan al individuo los artículos 16 y 19 del Código fundamental de la República, porque ni una ni otra de ambas autoridades es competente para proveer el auto de bien preso del quejoso, ni puede éste dejar de causar una violencia cuando no se justifica con motivo alguno, como sucede con el proveido por la "comision" que en copia certificada se ha servido adjuntar á su informe el C. José Matilde de Alcocer. Así es que con fundamento de estos preceptos constitucionales, y del artículo 1º fraccion 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el fiscal pide á V: se sirva sustanciar definitivamente este juicio declarando que la justicia de la Union ampara y protege al C. Evaristo Esquivel contra el acto del C. Jo-

sé Matilde Alcocer en virtud del cual fué reducido á prision, se que sea mantenga en ella de órden de éste como encargado del poder Ejecutivo del Estado, ó por disposicion de la H. Legislatura del mismo, que se dice estarlo juzgando. El fiscal, al pedir así, cumple tan solo con la conciencia de su público ministerio á cuyos deberes no le harán faltar las injustas apreciaciones de la autoridad contra quien tenga que ejercerlo, del mismo modo que V. tampoco hará tracion á los suyos, porque se le impute el terrible delito de haber sido presentado por sus conciudadanos como candidato para Gobernador del Estado.

Mérida, Febrero 4 de 1874.—*P. Huelos.*

Es copia sacada para remitir á México á efecto de que se publique en el "Semanario Judicial."

Mérida, Febrero 7 de 1874.—*José Anacleto Castillo.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mérida, Febrero 4 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Domingo Evia, en nombre del C. diputado Evaristo Esquivel, quien ha ratificado la queja contra el C. coronel José Matilde Alcocer que con el carácter de encargado del poder Ejecutivo del Estado, lo ha puesto preso in-comunicado, con infraccion de los artículos 16 y 19 de la Constitucion federal. Vista la suspension del acto reclamado; el requerimiento en nombre de la Union para que se cumpliera dicha suspension no cumplida; el auto en que se mandó notificar por la prensa, el requerimiento á la autoridad responsable, solicitándose el auxilio federal para llevarlo á cabo; la negativa del referido auxilio; el pedimento fiscal sobre este punto; el informe del C. coronel Alcocer en lo principal; el pedimento fiscal; la citacion para sentencia, con cuanto mas ver y tener presente convino.

Considerando: que el quejoso fué preso incommunicado en el cuartel de la Guardia nacional, la noche del 24 del mes próximo pasado, por orden del mentado coronel, como encargado del poder Ejecutivo del Estado, cuya prision dura hasta el día, aunque ya no con el rigor de incommunicacion.

Considerando: que aun suponiendo que C. Alcocer tuviese de derecho el carácter de encargado del poder Ejecutivo de que fué destituido por el decreto número 4 de la H. Legislatura, fecha 16 del mes anterior, al ordenar la prision del actor, ni así sería arreglada á los preceptos constitucionales, porque como diputado en ejercicio, á la H. Legislatura del Estado, goza del fuero que la Constitución particular del mismo le concede, por cuya razon debió de haberlo consignado á la Cámara antes de aprehenderlo, para que esta declarara si había ó no lugar á proceder en su contra, de acuerdo con el artículo 88 de la Constitución local.

Considerando: que era tanto mas necesaria la consignacion sin prision, cuanto que aunque dice el C. Alcocer que el quejoso vino á conspirar á esta Ciudad, ninguna prueba aduce de su dicho, siendo notorio lo contrario, atento á que el diputado Esquivel es público que estaba en ejercicio de sus funciones en la H. 5ª Legislatura, y que de otra manera sería ilusoria la inmunidad de que gozan los diputados; porque como dice el C. Fiscal, que nada sería mas fácil que con el pretexto de que una mayoría del Congreso, hostil al Ejecutivo, dijera este que estaba conspirando, para reducir á prision á los individuos que la componen é inutilizarlos en los momentos solemnes de votar una ley que le perjudicase, lo cual no podría evitar el poder Legislativo que es el soberano y no se apoya mas que en la fuerza moral de su misma soberanía, quedando á merced de los caprichos del Ejecutivo que dispone de la fuerza armada y viniendo por tierra nuestras instituciones con los golpes de Estado así justificados.

Considerando: que la fracción 24 artículo 58 de la Constitución particular del Estado, en que pretende apoyarse el C. Alcocer respecto de la prision del quejoso, no se contrae á los que tienen fuero constitucional y tampoco autoriza á poner preso á cualquiera, sino á las personas sospechosas contra quienes haya datos, tal que con estos previene que sean consignadas al Tribunal competente; y esto en el caso de que se halle amagada la tranquilidad pública, circunstancias todas que han faltado en la prision del C. Esquivel, la que ademas fué hecha sin mandamiento escrito que contuviera la causa legal del procedimiento.

Considerando: que el Gran Jurado, segun el tenor expreso del artículo 88 de la Constitución local, no tiene otra atribucion en los delitos comunes de los funcionarios que gozan de fuero constitucional, que la de declarar si há ó no lugar á proceder contra ellos, cuya atribucion es puramente política ó administrativa, formando un expediente instructivo y quedando el presunto reo en caso afirmativo, separado de su encargo y sujeto á la accion de los tribunales; sin que esta atribucion del Jurado pueda extenderse hasta decretar la prision del acusado, ni menos el auto motivado de ella, porque ambas cosas tocan á la jurisdiccion del Juez que deba juzgarlo por el delito comun, salvo el caso de delito infraganti á que se contrae la parte final del artículo 16 de la Constitución federal.

Considerando: que por esta razon el Gran Jurado no ha podido decretar el auto motivado de prision contra el actor, y menos la Comision de él, pues aunque por el oficio de fojas 11, se dice que se ha declarado bien preso al C. Esquivel por la Comision del Gran Jurado, en realidad no consta el auto fundado de ella, pero ni siquiera el motivo del procedimiento de dicha Comision.

Considerando: que por todo lo relacionado, ya sea que el diputado Esquivel permanezca preso por orden del coronel Alcocer, ó de la Comision del Gran Jurado, se está

violando en su persona la garantía de la 1ª parte; artículo 16 de la Constitución federal y como la prision ha excedido de tres días sin auto motivado de ella, pues que con hoy hace once días que está preso, también se infringe en su persona la garantía del artículo 19 constitucional.

Considerando: que si bien el acto reclamado ha quedado consumado de un modo irremediable, porque no se puede remediar la prision sufrida, este Juzgado no puede encausar desde luego al responsable de ella, por haberla ordenado el C. José Matilde Alcocer con el carácter de Gobernador del Estado, sino hasta la resolución del Congreso de la Union á quien se ha dado cuenta ya; así como se ha participado al Ejecutivo de la Union la negativa del auxilio federal; que se ha fundado en el artículo 20 de la ley orgánica de amparo, sin embargo de que este artículo á la letra dice: "Cuando á pesar de este requerimiento no empesare á cumplirse la sentencia, ó no se cumplierse del todo, si el caso lo permite, dentro de seis días, el Juez dará aviso al Ejecutivo de la Union, que cumplirá con la obligacion que le impone la fracción 13 del artículo 85 de la Constitución federal;" y como el caso no permitía demora, claro es que por la simple enunciaci6n de este artículo, no hubo raz6n para negar el auxilio pedido al General en Jefe de las fuerzas federales, para llevar á cabo la suspension del acto reclamado.

Por estos legales fundamentos y de conformidad con el parecer fiscal, arreglado á la fracci6n 1ª artículo 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869 y los artículos 16 y 19 constitucionales, la autoridad en nombre de los Supremos poderes, falla; primero: la Justicia de la Union ampara y protege al C. diputado Evaristo Esquivel contra el acto de prision que está sufriendo, sea que se mantenga en ella de 6rden del C. coronel José Matilde Alcocer, como encargado del poder Ejecutivo del Estado, ó por disposici6n de la fracci6n de la II. Legislatura del mismo, que se dice estarlo juzgan-

do; segundo: sáquese testimonio de este fallo para publicar, y elévense los autos en revision, á la Suprema Corte de Justicia como disponen los artículos 13 y 27 de dicha ley orgánica.

Hágase saber.—*I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

Es copia sacada para remitir á México, á efecto de que se publique en el "Semanario Judicial." Mérida, 7 de Febrero de 1874.—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 26 de 1874.—Visto el recurso de amparo interpuesto por el C. Evaristo Esquivel, diputado á la 5ª Legislatura del Estado de Yucatan, contra el C. Coronel José Matilde Alcocer, que con el carácter de encargado del Poder Ejecutivo del mismo Estado, lo ha puesto preso é incomunicado con infracci6n de los arts. 16 y 19 de la Constitución federal; vista la suspension del acto reclamado; el requerimiento en nombre de la Justicia de la Union para que se cumpliera dicha suspension; lo que no se verific6; el auto que se mand6 notificar por la prensa; el requerimiento de la autoridad responsable solicitándose el auxilio federal para llevarlo á cabo; la negativa del referido auxilio; el informe del Coronel Alcocer en lo principal; el parecer fiscal; la sentencia del inferior otorgando el amparo solicitado, y considerando: que está probado que el peticionario reducido á prision por 6rden del C. Coronel José Matilde Alcocer, que fungia de Gobernador del Estado de Yucatan, fué declarado bien preso por una comisi6n de la minoría de la 5ª Legislatura, que no es competente para asumir el carácter del Gran Jurado, por carecer del *quorum* que exige el art. 29 de la Constitución particular del Estado, lo cual

importa la violacion del art. 16 de la Constitucion federal.

Por todas estas razones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que ampara al C. Diputado Evaristo Esquivel.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el To- ca. Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordáz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 6 de 1874.—*Lic. Emilio Ordáz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por el C. Lic. Eugenio Acha, en representacion de D. Domingo Narvarte, contra el C. Administrador de Rentas de Ario, que le cobra el seis por ciento sobre precios de tarifa, por ciento cuarenta piezas de manta que introdujo de la fábrica de Salvatierra del Estado de Guanajuato.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Lic. Eugenio Acha, en representacion acreditada de D. Domingo Narvarte, del comercio de Ario, hace presente á este

Juzgado en su escrito de 29 de Diciembre próximo pasado: que habiéndosele consignado á su representado por la fábrica de mantas de Salvatierra, en el Estado de Guanajuato, las ciento cuarenta piezas que recibió en Ario, bajo la guía número 519, segun aparece del certificado que se acompaña, el Administrador de Rentas del lugar le exigió el impuesto decretado en la fraccion 5ª del artículo 1º de la ley del Estado de 31 de Julio del año próximo pasado, que gravó con el seis por ciento sobre precios de tarifa y como efectos nacionales, el algodón, lana y seda, y las manufacturas procedentes de estas materias; que como este decreto se opone abiertamente al que expidió el Congreso general en 1º de Mayo de 1868, en el que se prohíbe, que bajo ninguna denominacion, pueda un Estado imponer á los frutos de otro mayores impuestos que los que exija á los suyos propios; no estando gravadas las mantas que se elaboran en esta Capital y siendo por otra parte dicha disposicion legislativa dictada en virtud de la facultad que otorga la Constitucion general en la fraccion 9ª de su artículo 72; y que segun el 126 deben observarse estrictamente las leyes del Congreso general que emanen de la Constitucion, apesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes particulares de los Estados, juzgaba comprendido el caso de que trata en la fraccion 3ª del artículo 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, por lo que pedia se lo amparase contra los actos del Administrador de Rentas de Ario, que le exigió el impuesto de que habla la ley citada del Estado.

Del informe de este empleado, resulta: que la ley de 31 de Julio del año próximo pasado, tiene una aplicacion general, supuesto que se exige el cobro de que habla la fraccion 5ª á los mismos efectos cuando se presentan cubiertos con pases y amparados con guia, sin atender á su origen.

Tal inteligencia dada á la ley, destruye